

La oposición de la Ciudad emitió hoy una declaración conjunta en la que advirtió que "no precipitará una crisis" política. Pese a esto lanzó duros cuestionamientos al gobierno de Mauricio Macri, tras su citación a indagatoria por la causa de las escuchas ilegales. El titular del bloque Igualdad Social, Martín Hourest, leyó el documento en el inicio de la sesión de hoy en el parlamento comunal que firmaron las bancadas de Diálogo por Buenos Aires, la Coalición Cívica, Proyecto Sur, Bloque Peronista, Nuevo Encuentro, Encuentro Popular para la Victoria, Encuentro Progresista, el Partido Socialista y la UCR.

Se trata de toda la oposición, salvo el monobloque del MST de Marcelo Parrilli, que cerró filas en una dura crítica a Macri por su política de seguridad, aunque afirmó que "no aumentará el escándalo, sino que buscará por todos los medios reencauzar la política de seguridad y la ética pública hacia el fortalecimiento de nuestro sistema democrático".

"Somos responsables de la reparación y no cómplices de los daños institucionales, éticos y políticos que ha producido el Gobierno de la Ciudad... frente a la gravedad de las imputaciones realizadas al Jefe de Gobierno y al Ministro de Seguridad" por las escuchas, afirmó la comunicación.

La oposición expresó su "más enérgico repudio a la política de desprecio hacia la Legislatura que habiendo rechazado las explicaciones del Ministro de Seguridad (sobre inocultables violaciones a derechos individuales, surgimiento de redes de complicidad y aparición de eventuales actos de corrupción) en noviembre del 2009 fue desoído".

"Insistiendo luego con un nuevo pedido de explicaciones al jefe de la Policía Metropolitana, en marzo del 2010, que fue bloqueado. El maltrato a las instituciones para proteger pésimos y repudiables comportamientos personales, atenta contra la institucionalidad de la Ciudad. Es responsabilidad del Gobierno y en particular desde el Ejecutivo, dejar de ocultar funcionarios", afirmó la proclama.

La oposición ratificó su "vocación inmediata de abordar una política de seguridad ciudadana que incluya: la revisión de la ley de seguridad, la reorganización y funcionamiento de la Policía Metropolitana, el control sobre el desempeño de las fuerzas federales que operan en nuestro territorio y el reclamo del traspaso sobre las competencias y efectivos que limitan la autonomía de la Ciudad. Ni impunidad para el delito, ni para la mala policía (nacional o local) ni para

funcionarios corruptos".

Finalmente, insistió con su "compromiso de sostener las instituciones de la ciudad, respetar su desempeño, asegurar la independencia de poderes dejando de lado especulaciones oportunistas y comportamientos que ahonden los graves problemas creados por el propio Poder Ejecutivo".

"Estos bloques no precipitarán una crisis, no aumentaran el escándalo, sino que buscarán por todos los medios reencauzar la política de seguridad y la ética pública hacia el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Llamamos al gobierno a ponerse a la altura de sus responsabilidades", concluyó la declaración leída por Hourest.